V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

DIREITO INTERNACIONAL II

RAYMUNDO JULIANO FEITOSA

DIEGO ESCUDER

Copyright © 2016 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos.
Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS
Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN
Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP
Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC
Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:
Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH
Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR
Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches – UNINOVE
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)
Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:
Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF
Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDi
Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC
Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG
Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA
Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

D598
Direito internacional II [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UdelaR/Unisinos/URI/UFSM /Univali/ UPF/FURG;

Coordenadores: Diego Escuder, Raymundo Juliano Feitosa – Florianópolis: CONPEDI, 2016.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-5505-240-8
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Instituciones y desarrollo en la hora actual de América Latina.

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Interncionais. 2. Direito internacional. I. Encontro Internacional do CONPEDI (5. : 2016 : Montevidéu, URU).

CDU: 34

Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
www.conpedi.org.br

Universidad de la República
Montevideo – Uruguay
www.fder.edu.uy

V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

DIREITO INTERNACIONAL II

Apresentação

En el marco del Grupo de Trabajo Derecho Internacional II del V Encuentro Internacional del CONPEDI fueron presentados doce trabajos los cuales podemos agrupar en torno a las temáticas vinculadas al Derecho Internacional Público, al Derecho Internacional Privado, al Derecho Internacional Económico/Comercial, al Derecho Ambiental y al Derecho Internacional de los DDHH.

Específicamente los autores abordaron temas vinculados a los aspectos que hacen a la regulación de la Economía y Comercio Mundial, aspectos vinculado al fenómeno de la Integración Regional en todas sus variables, abordando algunos de los autores un proceso de integración especifico como lo es el MERCOSUR, y finalmente aspectos relacionados a las protección de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente

Mas allá de las variaciones temáticas de todos los trabajos, y una aparente amplitud de tópicos, podemos decir sin embargo que todos los escritos tienen un denominador común que hace al fenómeno de la globalización, y como la circulación ya sea de personas o demás factores productivos tienen una repercusión que amerita que se debata sobre aspectos regulatorios y normativos que hacen a estos fenómenos, y como esto influye en nuestra vida diaria.

Es así que vemos trabajos en donde se analizan temas vinculados al Comercio Mundial explicándose como las asimetrías producto de la globalización pueden ser atenuadas a través del uso de un Tratamiento Especial Diferenciado de los países menos desarrollados, siendo clave para ello el rol que debe tener la fijación de los criterios de clasificación del grado de desarrollo de cada país (Ruda Ryuiti Furukita Baptista y Tania Lobo Munis); continuando en esta temática encontramos una análisis del papel que juegan los sistemas de solución de controversias en el sistema multilateral de Comercio (OMC) y en particular cómo la utilización de instrumentos de defensa comercial previstos por los propios mecanismos existentes pueden provocar tensiones en el comercio mundial (Flávio Marcelo Rodrigues Bruno, Raimundo Giovanni Franca Matos). Finalizando la temática del Comercio Mundial y viendo como estos se vinculan a los temas ambientales encontramos un análisis sobre la

interrelación entre Comercio y Medio Ambiente, y la necesidad de incluir aspectos relacionados a la protección ambiental en las cadenas globales de valor sustentadas en los nuevos formatos de integración, léase mega acuerdos comerciales (Gabriela Soldano Garcez)

Los temas ambientales también son analizados en otro documento que específicamente abordara los aspectos de la contaminación transfronteriza en el dominio marítimo (Roxana Corbran Rizzo). Finalmente lo que hace a esta primer gran sistematización de trabajos vinculados al Comercio y Economía Mundial, y mas específicamente los temas económico-financieros, y el rol del Derecho Internacional en su abordaje, vemos el análisis que trata los asuntos relacionados a la reestructuración de la Deuda Soberana y el Derecho que tienen los Estados para actuar en este sentido (Rodrigo Alejandro Díaz Inverso)

Otro de los grandes ejes temáticos gira en torno a la Integración y el MERCOSUR, donde se busca analizar desde aspectos vinculados a como los ordenamientos jurídicos internos, específicamente las constituciones nacionales (en particular la brasileña) abordan estos temas en el sentido de construir una verdadera comunidad de naciones cuyo contenido no se limite únicamente a los aspectos relacionados a la integración comercial sino que sea un concepto mas abarcativo (Marco Cesar de Carvalho), este trabajo lo podemos relacionar al abordaje dado por el documento que analiza el fenómeno del MERCOSUR en un nuevo contexto internacional lo que da a este proceso de integración características de un nuevo modelo de integración (Mariana Loureiro Gama). Finalmente el proceso MERCOSUR es encarado en sus aristas jurídico institucionales analizándose la coexistencia de diferentes modos de solución de controversias, ya sea mediante el sistema previsto en el Protocolo de Olivos o bien en el Acuerdo de Arbitraje Comercial Internacional (Mario Jorge Philocreon De Castro Lima), hasta el estudio de la insuficiencia de los mecanismos de cooperación jurídica internacional en el ámbito del MERCOSUR y la propuesta de creación de un Tribunal Penal en ámbito regional (Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro), por último si bien no es un abordaje especifico del MERCOSUR, pero si en lo que atañe a la circulación de personas, y la jurisdicción internacional de los tribunales de acuerdo al nuevo Código de Proceso Civil Brasileño, en particular a la partición de bienes en casos de divorcios, separaciones judiciales o disolución de uniones estables (Fernando Pedro Meinero).

Todos estos temas hacen al ser humano, por lo que la comprensión del marco regulatorio que busca la protección del individuo debe ser estudiado, y este caso específicamente se abordó las aparentes dicotomías existentes entre las Leyes de Amnistía y la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Guilherme Vitor de Gonzaga Camilo)

Finalmente los temas vinculados al Derecho Internacional necesitan sin lugar a dudas un marco teórico que posibilite el análisis de tal diversa temática en la compleja realidad global, tema que también fue analizado (Mirlir Cunha) en el marco de este II Grupo de Trabajo de Derecho Internacional.

Vemos pues como estos temas tienen un punto en común que es el trabajar los aspectos jurídicos que hacen a los fenómenos que se producen en un mundo globalizado, donde la interdependencia, la cooperación, e integración están cada vez mas presente en nuestro accionar diario.

La lectura de estos trabajos será, sin lugar a dudas, una valiosa contribución para un análisis más cabal de estos fenómenos.

Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP

Prof. Diego Escuder

DA INSUFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL NO MERCOSUL PARA REPRESSÃO AOS CRIMES TRANSNACIONAIS: UMA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL DO MERCOSUL

LA INSUFICIENCIA DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MERCOSUR PARA LA REPRESSIÓN DE LOS DELICTOS TRANSNACIONALES: UNA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL PENAL DEL MERCOSUR

Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro [1]

Resumo

Trata-se de artigo que tem por finalidade discorrer sobre os atuais mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria penal no Mercosul, diante da constatação da insuficiência dos instrumentos tradicionais e do crescimento da criminalidade transnacional. Para tanto analisamos os novos mecanismos de cooperação e os dados apresentados pelo DRCI a fim de constatarmos se há, de fato, um melhor diálogo entre os integrantes do Mercosul ou se os entraves permanecem. Ao final proporemos a criação do Tribunal Penal do Mercosul e a MERCOPOL para investigar, instruir e decidir acerca dos crimes transnacionais, apresentando sua competência e estrutura.

Palavras-chave: Cooperação jurídica internacional, Mecanismos de cooperação, Mercosul, Tribunal penal do mercosul, Mercopol

Abstract/Resumen/Résumé

Este es un artículo que tiene por finalidad discurrir a cerca de los actuales mecanismos de cooperación jurídica internacional en matéria penal en el Mercosur, en razón de la constatación de la insuficiência de los instrumentos tradicionales y del crecimiento de la criminalidad transnacional. Para tanto analizamos los nuevos mecanismos de cooperación y los datos presentados por el DRCI a fin de constatar si hay, de hecho, un mejor dialogo entre los integrantes del Mercosur y si siguen existiendo los obstáculos. Al final propondremos la creación del Tribunal Penal del Mercosur y la MERCOPOL, presentando su competencia y estructura.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Cooperación jurídica internacional, Mecanísmos de cooperación, Mercosur, Tribunal penal del mercosur, Mercopol

[1] Pós doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona (ES). Doutora e mestra em Direito Público pela UFBA. Coordenadora da pós-graduação em ciências criminais da UCSAL.

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por escopo abordar a insuficiência dos mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria penal para a repressão aos crimes transnacionais ocorridos no Mercosul, notadamente o crime organizado, lavagem de capitais, tráfico de drogas, pessoas e órgãos e o suborno internacional.

Para tanto analisaremos os novos instrumentos de cooperação estabelecidos para garantir uma maior comunicação entre os Estados membros do bloco e, por consequência, se estabelecer a apuração da infração e, se for o caso, a punição.

Entretanto, em razão da dificuldade que os países possuem em rever o conceito de soberania, estando ainda atrelados à definição pautada no absolutismo e a figura do monarca, vislumbramos o primeiro embaraço para uma cooperação eficiente entre os membros do Mercosul.

Não obstante, a segunda obstrução refere-se à definição do próprio país competente para processar e julgar o delito transnacional: de quem seria o interesse? Constatada a competência da nação, qual regramento deve ser aplicado, do requerente da produção da prova ou do requerido?

O terceiro problema corresponde à determinação de qual instrumento será adotado, pois, também em razão da antiquada concepção de soberania, determinadas provas só são aceitas no Brasil, por exemplo, se forem cumpridas as formalidades da nossa legislação, não se observando se o pleito foi formulado pela autoridade competente do país solicitante.

Diante de tais obstáculos, apresentaremos dados sobre a insuficiência da cooperação entre as nações integrantes do bloco, e ainda as principais críticas formuladas pelo Ministério da Justiça do Brasil sobre a comunicação com os países vizinhos.

Na etapa final deste artigo defendemos a criação do Tribunal Penal do Mercosul, tratando da autorização das constituições dos países membros, bem como a competência, estrutura e funcionamento da Corte como alternativa ao estrangulamento atual dos mecanismos de cooperação, objetivando ainda a investigação e punição adequada dos crimes transnacionais.

2. DA INSUFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL NO MERCOSUL PARA REPRESSÃO À CRIMINALIDADE TRANSNACIONAL

Os tradicionais mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria penal são alvo de críticas da doutrina pátria em razão da sua insuficiência para a persecução e posterior punição aos crimes transnacionais, notadamente os delitos perpetrados por organizações criminosas.

Não obstante, novos mecanismos foram adotados pelos Estados-parte nas relações travadas entre si e com distintos países, sem, contudo, apresentarem uma resposta eficaz à problemática do aumento das práticas delitivas transnacionais. Como exemplo, temos o incremento do crime organizado e os delitos relacionados a tais associações, como a lavagem de capitais, o tráfico internacional de drogas, órgãos e pessoas e o suborno internacional (MUGGAH, 2016).

Neste tópico abordaremos os instrumentos mais recentes de cooperação entre as nações do bloco econômico, previstos no protocolo de assistência mútua do Mercosul e na Convenção de Viena e Convenção de Palermo, especificamente o auxílio direto, a transferência de processos, transferência de presos e investigações conjuntas. Em seguida, analisaremos as críticas feitas a tais mecanismos e os dados fornecidos pelo próprio Mercosul e o DRCI – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – para avaliarmos se são suficientes ou não tais mecanismos para o combate aos crimes transnacionais.

2.1. O PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA MÚTUA EM ASSUNTOS PENAIS DO MERCOSUL

O primeiro instrumento a ser tratado, antes mesmo de analisarmos o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais do Mercosul, é o auxílio direto, tendo em vista que é apontado hoje como o principal mecanismo de cooperação não apenas dos países integrantes desse bloco, mas da União Europeia.

Com efeito, a Convenção Europeia 2000 (TRIUNFANTE, 2013, p. 50-51) – CE2000 –

passou a prever naquele continente o auxílio direto como o instrumento basilar da cooperação, por ser mais célere, objetivando a troca de informações e produção de provas, possibilitando a comunicação direta entre as esferas da administração da Justiça, sem que seja necessário transcorrer o burocrático percurso das Cartas Rogatórias.

O auxílio direto foi adotado pelos países do Mercosul, a exemplo do Brasil, através da Resolução n° 09 do Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 2016).

Para tanto, o órgão que deseja obter a prova em outro país ou realizar algum ato de comunicação, por exemplo, remeterá o pedido à autoridade central daquela nação que, por sua vez, entrará em contato com a autoridade central do Estado requerido, que enviará diretamente o pedido ao órgão encarregado de executá-lo.

A autoridade central é o órgão responsável pelo recebimento e envio de pedidos a outros países; é incumbido, portanto, pela interlocução entre o Brasil e outras nações para requerimentos ou deliberações sobre requerimentos, facilitando o intercâmbio de comunicações.

Na cooperação envolvendo os países do Mercosul e na maioria dos acordos envolvendo o Brasil, a autoridade central é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Adverte Fernanda Regina Vilares:

> [...] o DRCI exerce papel de autoridade central no âmbito da cooperação jurídica internacional, órgão que centraliza a cooperação jurídica internacional. Não se trata apenas de enviar e receber documentos, mas de buscar a efetividade da cooperação, por se tratar de órgão especializado nas funções administrativas atinentes às relações entre os Estados. Assim, os pedidos de auxílio direto e cartas rogatórias tramitam por esse órgão.
> Segundo dados do Ministério da Justiça, as solicitações de cooperação jurídica internacional vêm crescendo consideravelmente. Em 2004, tramitaram pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 2097 solicitações, enquanto que em 2007 o número subiu para 3653. Dentre estas, mais de 600 casos estão relacionados à recuperação de ativos enviados ilicitamente ao exterior. (VILARES, 2013, p. 538-539)

Se o Brasil for o Estado requerente, o pedido da autoridade solicitante é encaminhado ao DRCI que recepcionará e analisará as formalidades necessárias; após, encaminha ao DCIJ para que proceda ao envio aos canais competentes do Ministério das Relações Exteriores (MRE) para que o pedido seja enviado à autoridade central estrangeira para adoção das providências cabíveis para o cumprimento do pedido. O caminho inverso ocorre quando há o recebimento da resposta da autoridade estrangeira.

No sítio eletrônico do Ministério da Justiça (BRASIL, Ministério da Justiça, 2016)

encontramos os mecanismos de atuação do DRCI, destacando o site a importância do organismo para combater o crime organizado, reforçando que os instrumentos tradicionais para a repressão de tal criminalidade não são suficientes, tendo em vista a sofisticação na sua atuação. Dessa forma, a apreensão de bens, fonte de recursos para o crime organizado auxiliaria a desestimulá-los.

O Protocolo de Assistência Jurídica mútua em Assuntos Penais do Mercosul, promulgado pelo Decreto n° 3468/2000 (BRASIL, 2016) prevê em seu artigo 2º que a assistência compreenderá notificação de atos processuais, recepção e produção de provas, localização ou identificação de pessoas, notificação de testemunhas ou peritos para comparecimento voluntário, com o fim de prestar esclarecimentos ao Estado requerente, bem como o translado de pessoas sujeitas ao processo penal para comparecimento como testemunha no Estado requerente, medidas cautelares, cumprimentos de solicitações, entrega de documentos e outros meios de prova ou qualquer outra forma de assistência que atenda às finalidades deste protocolo e que não viole as leis do Estado requerido.

Não há, portanto, no mencionado protocolo a previsão de qualquer harmonização das legislações penais dos países envolvidos, tampouco dispõe acerca da coordenação entre os Estados-membros quando o delito for transnacional, afetando bens jurídicos de mais de um país, a exemplo do terrorismo, suborno transnacional, tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, tráfico de órgãos, entorpecentes, dentre outros.

Não obstante, o artigo 1º do mencionado protocolo estabelece a finalidade do documento e o artigo 2º trará o alcance da assistência, nos seguintes termos:

> A assistência compreenderá:
> a) notificação de atos processuais;
> b) recepção e produção de provas, tais como testemunhos ou declarações, realização de perícias e exames de pessoas, bens e lugares;
> c) localização ou identificação de pessoas;
> d) notificação de testemunhas ou peritos para o comparecimento voluntário a fim de prestar testemunho no Estado requerente;
> e) traslado de pessoas sujeitas a um processo penal para comparecimento como testemunhas no Estado requerente ou com outros propósitos expressamente indicados na solicitação, conforme o presente Protocolo;
> f) medidas acautelatórias sobre bens;
> g) cumprimento de outras solicitações a respeito de bens, como por exemplo o seqüestro;
> h) entrega de documentos e outros elementos de prova;
> i) apreensão, transferência de bens confiscados e outras medidas de natureza similar;
> j) retenção de bens para efeitos do cumprimento de sentenças judiciais que imponham indenizações ou multas impostas por sentença judicial; e
> k) qualquer outra forma de assistência em conformidade com os fins deste Protocolo que não seja incompatível com as leis do Estado requerido. (BRASIL, 2016)

Percebemos, pois, que o Protocolo de Assistência mútua prevê os mesmos mecanismos

tradicionais de cooperação jurídica internacional em matéria penal, não trazendo, na prática, qualquer novidade.

Nos artigos 7 e 8 teremos previsões claras quanto à determinação de quem é o Estado solicitante e o Estado solicitado, a lei aplicável e o processamento. Todavia, tornamos a enfatizar, não há quaisquer regras quanto a aplicação da assistência nos casos do delito envolver mais de um Estado interessado e pior: há expressa previsão quanto à possibilidade de denegação da assistência nos crimes fiscais.

Quanto ao traslado de pessoas sujeitas a procedimento penal em outro país, o protocolo do Mercosul somente prevê o traslado consentido da parte; caso não haja consenso entre a parte e o Estado solicitado, o procedimento a ser adotado é o pedido de extradição. Caso a própria Carta Política do país requerido vedar tal entrega, por ser nacional a pessoa sujeita ao procedimento, a extradição será negada. Outrossim, insta salientar que o Protocolo prevê a aplicação de suas regras ainda que o fato não seja previsto como criminoso no Estado-solicitado; e nos casos de não aceitação do traslado pela parte? Aplica-se o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815/81, que exige a dupla-incriminação – princípio da identidade da norma – no caso concreto? Ou o protocolo iria se sobrepor à legislação interna? Trata-se de novo entrave.

A Transferência de processos está prevista no art. 21 da Convenção de Palermo – Decreto 5015/2004 (BRASIL, 2016). Trata-se de uma opção interessante quando é vedada a extradição do agente, por exemplo. Neste caso, pela facilitação da justiça social, é possível que o Estado Requerente transfira ao Requerido (onde, por exemplo, reside o acusado e a legislação do país proíbe a extradição) que o processo seja transferido para este Estado visando a conclusão da instrução e a eventual condenação.

Embora o art. 8° da Convenção de Viena - Decreto 154/1991 (BRASIL, 2016) – e o art. 21 da Convenção de Palermo nada estabeleçam sobre requisitos para a transferência de processos, tais documentos se basearam na Convenção Europeia de Transferência de Processos em Matéria Criminal de 1972, que exigiam a dupla incriminação (art. 7°) e a vedação ao *bis in idem* (art. 35).

Por fim, insta ainda tratar das investigações conjuntas também previstas na Convenção de Palermo, no artigo 19, referindo-se a uma inovação da convenção, voltada à investigação realizada no caso dos crimes organizados. Neste caso teríamos a atuação conjunta das polícias investigativas dos Estados interessados, concentrados em um só lugar.

Diferentemente da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) (embora a ideia seja similar), em que a autoridade investigativa do país no qual ocorreu o crime assume a investigação, sendo meramente auxiliado pelos investigadores estrangeiros interessados, na investigação conjunta todos teriam a mesma participação. Outra diferença: participariam, além das autoridades investigativas, outros agentes do procedimento preliminar, como o Ministério Público e o juiz investigador, nos países que admitem a figura (juiz das garantias).

Ocorre que, mais uma vez nos deparamos com a resistência do Brasil em aceitar os mecanismos de cooperação. Podemos citar o Agravo Regimental na Carta Rogatória 2484 RU:

> **EMENTA CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIADIRETA. NECESSIDADE DE EXEQUATUR**.
> Ante o disposto no art. 105, i, i, da Lei Maior, a Suprema Corte considerou que a única via admissível para **a solicitação de diligência proveniente do exterior é a Carta rogatória, que deve submeter-se previamente ao crivo do Superior Tribunal de Justiça**.
> Assim, a despeito do disposto no art. 7º, parágrafo único, da Resolução n. 9, da Presidência do STJ, de 4.5.2005, a qual à evidência não pode prevalecer diante do texto constitucional, a execução de diligências solicitadas por autoridade estrangeira deve ocorrer via carta rogatória.
> Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos nossos). (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 2016).

Novamente destacamos as dificuldades enfrentadas na prática para a eficiência plena dos mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria penal envolvendo o Brasil e outro Estado soberano, bem como o próprio Mercosul.

Insta registrar que há ainda Acordo adicional ao protocolo, o Acordo sobre o Mandado Mercosul de Captura e Procedimentos de Entrega entre os Estados Partes do Mercosul e Estados Associados (Mercosul/CMC/DE n. 48/10), denominado Acordo de Foz do Iguaçu de 2010 (MERCADO COMUM DO SUL, 2016), despontando como boa alternativa ao também burocrático procedimento de extradição, tendo em vista que sua tramitação será diretamente perante a autoridade judicial competente, observando-se a legislação interna do Estado requerido (ARAS, 2016).

Passemos a análise de outras Convenções para repressão aos crimes transnacionais. Destacamos no presente artigo a Convenção de Viena e a Convenção de Palermo.

2.2. CONVENÇÃO DE VIENA E CONVEÇÃO DE PALERMO

A Convenção de Viena celebrada em 1988 objetiva o combate ao tráfico de drogas e a lavagem de capitais – conforme previsão nos artigos 7° e 8°. Irá interessar a esta pesquisa em razão da repressão ao crime organizado e o crime de lavagem de capitais[1] e a convenção ter sido elaborada com a finalidade de encerrar o lucro advindo do crime.

A Convenção traz a cooperação em seus artigos 7º ao 11º e destacamos no momento o artigo 11[2] do diploma legal, que versa especificamente sobre a entrega vigiada, possibilitando, por conseguinte, que as autoridades investigativas remetam o produto do crime a outro Estado, incentivando, portanto, a cooperação entre os países.

No ordenamento jurídico brasileiro, temos a lei 9163/98 (BRASIL, 2016), recentemente alterada pela lei 12.683/12 que versa sobre o assunto. No capítulo IV, artigo 8°, há a previsão para que o juiz determine a execução das medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos dos crimes antecedentes da lavagem quando a medida for requerida por autoridade competente de outro Estado. Ainda que não haja Tratado ou Convenção entre a nação solicitante e o Brasil, poderá o país adotar medidas pautado no princípio da reciprocidade.

Destacamos aqui a previsão para a destinação do ativo recuperado – malgrado, como já afirmado, não haja tratado específico sobre o procedimento de recuperação de ativo – determinando o §2º art. 8º, que o produto reavido será divido entre os países na proporção da metade, ressalvando-se ainda o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Dentre as medidas indicadas pela Convenção de Viena e pela Lei de Lavagem de capitais para a repressão aos crimes transnacionais, temos ainda a criação do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), da Unidade Financeira de Inteligência (UFI) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Como outro exemplo, temos a Convenção da ONU contra o crime organizado transnacional – ou Convenção de Palermo. No bojo da Convenção estabelecem-se no artigo 27[3] os mecanismos de cooperação entre os Estados signatários; para tanto, há previsão da

[1] Ressalte-se que há ainda a Convenção de Mérida que também visa visando o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro – artigos 43 ao 46.

[2] Os demais artigos trazem a mesma redação do já analisado protocolo de assistência judiciária mútua do Mercosul.

[3] "Artigo 27: Cooperação entre as autoridades competentes para a aplicação da lei; 1. Os Estados Partes cooperarão estreitamente, em conformidade com os seus respectivos ordenamentos jurídicos e administrativos, a fim de reforçar a eficácia das medidas de controle do cumprimento da lei destinadas a combater as infrações previstas na presente Convenção. Especificamente, cada Estado Parte adotará medidas

cooperação estrita entre os países, em conformidade com os ordenamentos jurídicos internos, devendo haver o reforço ou criação de canais de comunicação entre as Estados para o auxílio na investigação dos crimes previstos na Convenção.

Para tanto, os países se comprometem a cooperar na produção de provas, cumprindo solicitações de bloqueios de bens, busca e apreensão ou outras medidas cautelares, prestações de informações, constatação sobre a veracidade de documentos, movimentações bancárias suspeitas, ou outras formas para facilitar a investigação e eventual condenação de envolvidos, respeitando-se sempre o direito interno.

Remetemos o leitor ao início deste tópico quando tratamos especificamente da transferência de processos – artigo 21 da Convenção de Palermo – e das investigações conjuntas – artigo 19 da mesma convenção – já tendo sido objeto, por conseguinte, de análise neste artigo sobre os mecanismos de cooperação jurídica internacional para a repressão ao crime organizado transnacional.

3. A PROPOSTA DA CRIAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL DO MERCOSUL

---

eficazes para: a) Reforçar ou, se necessário, criar canais de comunicação entre as suas autoridades, organismos e serviços competentes, para facilitar a rápida e segura troca de informações relativas a todos os aspectos das infrações previstas na presente Convenção, incluindo, se os Estados Partes envolvidos o considerarem apropriado, ligações com outras atividades criminosas; b) Cooperar com outros Estados Partes, quando se trate de infrações previstas na presente Convenção, na condução de investigações relativas aos seguintes aspectos: i) Identidade, localização e atividades de pessoas suspeitas de implicação nas referidas infrações, bem como localização de outras pessoas envolvidas; ii) Movimentação do produto do crime ou dos bens provenientes da prática destas infrações; iii) Movimentação de bens, equipamentos ou outros instrumentos utilizados ou destinados a ser utilizados na prática destas infrações; c) Fornecer, quando for caso disso, os elementos ou as quantidades de substâncias necessárias para fins de análise ou de investigação; d) Facilitar uma coordenação eficaz entre as autoridades, organismos e serviços competentes e promover o intercâmbio de pessoal e de peritos, incluindo, sob reserva da existência de acordos ou protocolos bilaterais entre os Estados Partes envolvidos, a designação de agentes de ligação; e) Trocar informações com outros Estados Partes sobre os meios e métodos específicos utilizados pelos grupos criminosos organizados, incluindo, se for caso disso, sobre os itinerários e os meios de transporte, bem como o uso de identidades falsas, de documentos alterados ou falsificados ou outros meios de dissimulação das suas atividades; f) Trocar informações e coordenar as medidas administrativas e outras tendo em vista detectar o mais rapidamente possível as infrações previstas na presente Convenção. 2. Para dar aplicação à presente Convenção, os Estados Partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais que prevejam uma cooperação direta entre as suas autoridades competentes para a aplicação da lei e, quando tais acordos ou protocolos já existam, considerarão a possibilidade de os alterar. Na ausência de tais acordos entre os Estados Partes envolvidos, estes últimos poderão basear-se na presente Convenção para instituir uma cooperação em matéria de detecção e repressão das infrações previstas na presente Convenção. Sempre que tal se justifique, os Estados Partes utilizarão plenamente os acordos ou protocolos, incluindo as organizações internacionais ou regionais, para intensificar a cooperação entre as suas autoridades competentes para a aplicação da lei. 3. Os Estados Partes procurarão cooperar, na medida das suas possibilidades, para enfrentar o crime organizado transnacional praticado com recurso a meios tecnológicos modernos". (BRASIL, 2016).

Diante da insuficiência dos mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria penal para a repressão aos crimes transnacionais, constatada quer em razão do aumento da prática de tais crimes no bloco, quer visualizada pela dúvida quanto ao Estado competente para processar e julgar o delito, ocasionando perda de tempo com o consequente desaparecimento das provas e impunidade dos sujeitos envolvidos, quer ainda em razão da não cooperação propriamente dita entre os membros do Mercosul. Como consequência há o incremento da violação à saúde pública, à segurança, à liberdade ou à ordem econômica e tributária do bloco.

3.1. INSUFICIÊNCIA DOS NOVOS INSTRUMENTOS E OS PRINCIPAIS ENTRAVES QUANTO À COOPERAÇÃO ENTRE OS PAÍSES DO MERCOSUL

Malgrado tenhamos um avanço na cooperação jurídica internacional em matéria penal, não podemos olvidar que ainda estamos distantes de uma cooperação eficaz. Constatamos tal insuficiência tanto nos dados apresentados no sítio eletrônico do Ministério da Justiça (BRASIL, 2016), em que observamos a resistência em alguns casos dos países integrantes do Mercosul em cooperar, mesmo no caso do auxílio direto, por haver ainda uma enorme dificuldade em se compreender a necessária redefinição da soberania (FERRAJOLI, 2002, p. 01-02), adotando-se um conceito mais moderno e adequado à realidade internacional, quanto nos deparamos com o próprio depoimento dos representantes das polícias judiciárias dos países integrantes do bloco, citando especificamente o combate ao tráfico de pessoas:

> No debate relativo à questão da COMUNICAÇÃO ENTRE AS DISTINTAS FORÇAS DE SEGURANÇA E/OU POLICIAIS NO COMBATE AO TRÁFICO DE PESSOAS, a equipe brasileira defendeu o fortalecimento dos Gabinetes de Gestão Integrada e que o Ministério Público e o Judiciário estejam mais comprometidos com a celeridade da investigação. A equipe chilena ressaltou que geralmente há pouca comunicação entre as polícias, mas que elas se coordenam para investigações de grande relevância. Os integrantes da equipe paraguaia afirmaram que a comunicação entre as distintas forças de segurança é escassa, ainda mais diante do crescimento do delito e registrou, mais uma vez, que a burocracia dificulta a investigação coordenada entre países. Os uruguaios, por sua vez, defenderam que a comunicação entre as diferentes forças de segurança deve ser fluida e que as distintas unidades devem reunir esforços para combater um delito tão complexo, de caráter internacional (SPRANDEL; PENNA, 2016).

Em verdade, o principal entrave para a cooperação jurídica internacional consiste, além da burocracia para tramitação dos pedidos – e, não raro, visualizamos pedidos de nulidade de provas ou processos por se compreender que a colheita do elemento deveria ter sido realizada

por carta rogatória e não por auxílio direto – como em razão da própria dificuldade em se compreender qual seria o país competente para processar e julgar o crime transnacional.

Percebemos, portanto, que mesmo diante de instrumentos mais modernos, as dificuldades apontadas por Fábio Bechara (BECHARA, p. 56-57) persistem, quais sejam, desde a definição de qual Estado seria o competente para processar e julgar o crime, até qual legislação seria aplicada, a do país requerente ou requerido.

Não obstante, cabe ainda ressaltar que alguns países integrantes do bloco não possuem uma legislação interna que regulamente a cooperação jurídica internacional, a exemplo do Uruguai, que, segundo o Ministério da Justiça do Brasil (BRASIL, Ministério da Justiça, 2016) possui tão somente uma Lei que versa sobre o dever de cooperar nos casos de tráfico internacional de drogas, Lei 17.016/98, e uma lei que trata da corrupção transnacional, Lei 17.060/98.

Citando situação prática, o Ministério da Justiça apresenta como um dos principais obstáculos para a cooperação com o país vizinho os próprios atos de comunicação:

> **Citação/Notificação/Intimação:**
> Uma das hipóteses de denegação de assistência ocorre quando o cumprimento da solicitação seja contrário à segurança, à ordem pública ou a outros interesses essenciais do Estado requerido.
> A esse respeito, cumpre observar que a Autoridade Central uruguaia devolve casos cujo objetivo é a citação ou a intimação, sob a justificativa de ser vedado o instituto da revelia, segundo o artigo 21 da Constituição do Uruguai, e que as diligências pretendidas infringiriam os princípios e normas de ordem pública do ordenamento jurídico uruguaio.
> Esse impasse entre a cooperação jurídica internacional do Brasil e Uruguai ocorre somente em casos cujo endereço do alvo da diligência seja no Departamento de Cerro Largo, comarcas de Rio Branco e Mello, na República Oriental do Uruguai.
> No Uruguai a justiça é um poder de Estado independente. Os juízes têm total independência técnica na realização de sua tarefa. Dessa forma, ante a independência do Poder Judicial, a Autoridade Central uruguaia, que faz parte do Poder Executivo, não pode fazer outra coisa senão devolver um pedido de cooperação sem diligenciá-lo, haja vista o mesmo vir rejeitado do judiciário.(BRASIL, Ministério da Justiça, 2016).

Com a Argentina (BRASIL, Ministério da Justiça, 2016) há maior fluência na cooperação, pois o país possui legislação interna específica sobre cooperação, qual seja "*Ley de cooperación internacional en materia penal*", de Lei n° 24.767, de 13 de janeiro de 1992, além de ser signatário das principais convenções internacionais pra repressão ao crime transnacional (crime organizado, tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro e suborno internacional).

O Paraguai (BRASIL, Ministério da Justiça, 2016) assim como a Argentina também possui legislação interna que versa sobre a cooperação, entretanto, trata somente da lavagem de capitais, Lei n. 1015/96.

Na Venezuela (BRASIL, Ministério da Justiça, 2016) a previsão sobre cooperação jurídica internacional em matéria penal está prevista nos artigos 108 e 201 do código orgânico de processo penal, exigindo-se o preenchimento de alguns requisitos para o cumprimento dos pedidos de cooperação.

Os três países apresentam como questão particular a retenção de documentos bancários pelo período apenas de 05 (cinco) anos e, dessa forma, se o pleito de cooperação versar sobre informação de tal documentação superior a tal lapso temporal, poderá ser negado o pedido pela não exigência da retenção das informações e consequente inexistência dos dados.

Insta, porém, indagar: na prática, há, de fato, cooperação entre o Brasil e os integrantes do Mercosul?

Segundo dados informados pelo DRCI (BRASIL, Ministério da Justiça, 2016), em 2014, percebemos que foram promovidos 128 pedidos novos da Argentina e foram cumpridos 54 e 06 parcialmente cumpridos; do Paraguai foram 213 pedidos, sendo 88 cumpridos e 07 parcialmente cumpridos; do Uruguai, foram 158 pedidos e 77 cumpridos. Chama a atenção que apenas foram formulados 02 pedidos da Venezuela, número muito mais baixo que dos demais países, sendo 01 cumprido.

Percebemos, pois que os números, embora expressivos, ainda representam o cumprimento de menos de 50% dos pedidos novos, revelando que, malgrado haja expressa adoção por parte desses países quanto ao Protocolo de Assistência Judiciária Mútua em Assuntos Penais do Mercosul e demais convenções já citadas, na prática, as críticas formuladas anteriormente persistem.

Dessa forma, defenderemos no próximo tópico a criação do Tribunal Penal do Mercosul e da MERCOPOL, por entendermos que os principais obstáculos ora apontados serão superados.

3.2.NECESSIDADE DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIA

Para que haja a implementação do Tribunal Penal do Mercosul, é mister que se promova uma adequação das Constituições dos países signatários a fim de que, através de Emendas Constitucionais, exista a transferência da competência da Justiça Federal, província ou do juízo do local para a Corte, quando os delitos envolverem interesses de mais de uma nação, ofendendo bens jurídicos de mais de um país interessado.

A Constituição brasileira autoriza no artigo 4°, incisos II e IX, bem como no artigo 7° dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias a criação da presente Corte. Podemos afirmar que a proposta da criação do Tribunal objetivando reprimir os crimes transnacionais graves que ofendem mais de um país, com consequências contra os direitos humanos.

A Constituição da Nação Argentina (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2016) prevê expressamente no artigo 118 tal possibilidade de transferência de competência:

> La actuaclón de estas juiclos se hará en la misma provlncia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación. contra el derecho de gentes. el Congreso determinará por una ley especial ellugar en que haya de seguirse el juicio

Citamos ainda os artigos 27 e 38 da Carta Magna argentina que também autorizam a criação do Tribunal.

Quanto à Constituição do Paraguai, pensamos ser ela o diploma mais completo quanto à admissibilidade não só da jurisdição penal supranacional quanto à cooperação jurídica internacional em matéria penal, dispondo em seus artigos 137, 141 a 145 e 257. Transcrevemos por ora o artigo 145:

> Articulo 145. DEL ORDEN JURÍDICO SUPRANACIONAL La República deI Paraguay. en condiciones de igualdad con otros Estados. admite un orden juridico supranacional que garantie la vigencia de los derechos humanos. de la paz. de la justicia. de la cooperación y deI desarrollo. en lo politico. económico. social y cultural. Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoria absolutà de cada Câmara deI Congreso (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2016).

Já a Constituição do Uruguai estabelece que o país irá buscar a integração regional:

> CAPíTULO IV Articulo 6. En los tratados intenacionales que celebre la República prepondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán decididas porei arbltraje u otros medlos pacíficos. La República procurará la Integraclón soclal y económlca de los Estados,Latlnoamericanos, especialmente en lo que se reflere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimlsmo, propenderá a la efectiva complementaclón de sus servicios públicos (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2016).

Por fim, a Constituição da Venezuela autoriza a instituição de órgão para solucionar conflitos internacionais nos artigos 4°, 152 ao 155 (GEORGETOWN UNIVERSITY, 2016).

Caberá a Corte processar e julgar pessoas físicas e jurídicas por crimes graves transnacionais em razão do bem jurídico violado e da supranacionalidade, como por exemplo, crime organizado transnacional, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de órgãos, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, guerrilhas armadas, terrorismo, crimes contra a ordem tributária e aduaneira quando cometidos por empresas binacionais contra a Tarifa Externa Comum do MERCOSUL.

Explicamos: diante da prática de tráfico internacional de drogas em que a produção da cocaína, por exemplo, ocorreu no Venezuela e entrou no Brasil através de Manaus ou Roraima, sendo enviada posteriormente à Argentina, podendo ter sido ainda comercializada em todos esses países, temos o interesse em processar e julgar de mais de uma nação componente do bloco, havendo, por conseguinte, a transnacionalidade e a ofensa de um bem jurídico coletivo.

Recairia, por conseguinte, à MERCOPOL – Polícia do Mercosul, que iremos abordar adiante – a concentração da investigação e envio do inquérito ao país competente para instruir e sentenciar o caso. Entretanto, constatada a desídia do país em conduzir o processo, diante da demora injustificada no processamento do feito, ou pela falta de imparcialidade ou independência, ou vislumbrando-se o colapso total ou substancial do sistema nacional de justiça do Estado, teremos o envio do caso à Corte Penal do Mercosul, sendo sua competência, por conseguinte, subsidiária.

3.3.ESTRUTURA E PROCEDIMENTO

No que concerne à investigação da autoria e materialidade dos delitos transnacionais, deve-se estabelecer a cooperação entre as polícias federais, das províncias ou locais dos Estados-membros do Mercosul que seriam competentes para apurar a autoria e materialidade do delito, criando-se, a MERCOPOL (BRUTTI, 2016), com as mesmas finalidades da EUROPOL (EUROPOL, 2016). Sobre a EUROPOL e a Cooperação entre as polícias, Raúl Granillo Ocampo pontua que:

> **§74. Objetivos e âmbitos de aplicação da cooperação policial e judiciária em matéria penal.** Conforme o estabelecido no Tratado atualmente vigente, o objetivo da União nessa matéria será oferecer aos cidadãos um alto grau de segurança dentro de um espaço de liberdade, segurança e justiça, elaborando ação comum entre os Estados membros nos âmbitos da cooperação judicial e judicial em matéria penal e mediante a prevenção e luta contra o racismo e a xenofobia.

> [...] A ação comum no âmbito da cooperação policial compreende a cooperação operativa entre as autoridades competentes, inclusive os serviços de polícia de alfândega e outros serviços especializados nos Estados membros, com funções coercitivas, em relação à prevenção, localização e investigação de fatos delitivos (OCAMPO, 2009, p. 351).

Dessa forma, a autoridade policial da nação onde foi consumado o delito irá produzir as provas pertinentes à elucidação do caso concreto. Se deparando com delito transnacional no curso das investigações, havendo o interesse de mais de um Estado membro, remeterá as provas colhidas e suas conclusões à autoridade policial da MERCOPOL.

Esta coordenará as investigações e solicitará às autoridades policiais de outras nações envolvidas no fato delitivo para que provas complementares sejam produzidas, sendo que as provas e conclusões também serão remetidas à MERCOPOL (BRUTII, 2016)[4] que centralizará as investigações. Após as suas conclusões, remeterá os autos do inquérito ao Procurador do Mercosul.

Assim como na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a notícia crime sobre a incapacidade do Estado-parte em processar e julgar o delito pode ser proposta por qualquer pessoa física ou jurídica diante da Comissão Interamericana (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2016), no presente caso, poderá ser apresentada junto à MERCOPOL ou Ministério Público do Mercosul.

Adotando a estrutura do Tribunal Penal Internacional[5] – Decreto 4388/2002 (BRASIL, 2016) – , a ocorrência deve ser endereçada ao Ministério Público da Corte Penal do Mercosul, que, por sua vez irá verificar a plausibilidade do seu conteúdo e encaminhar pedido à Câmara Preliminar para que se proceda à análise do caso, a fim de verificar se há, de fato, matéria

[4] Salientamos que a necessidade da criação da MERCOPOL é sentida pelos próprios representantes das polícias investigativas dos Estados membros.

[5] "Artigo 15 O Promotor O Promotor poderá instaurar de ofício uma investigação com base em informações acerca de um crime sob a jurisdição do Tribunal. O Promotor verificará a seriedade da informação recebida. Para tal fim, poderá solicitar mais informações a Estados, órgãos das Nações Unidas, organizações intergovernamentais ou não-governamentais ou a outras fontes fidedignas que considere apropriadas e poderá receber testemunhos escritos ou orais na sede do Tribunal. O promotor, se concluir que há base suficiente para iniciar uma investigação, apresentará à Câmara de Questões Preliminares um pedido de autorização para tanto, junto com a documentação probatória. As vítimas poderão encaminhar representações à Câmara de Questões Preliminares, em conformidade com as Regras de Procedimento e Prova. Se, após ter examinado o pedido e a documentação probatória, a Câmara de Questões Preliminares considerar que há base suficiente para iniciar uma investigação e que o caso parece recair sob a jurisdição do Tribunal, autorizará a instauração de inquérito, sem prejuízo das resoluções subseqüentes que possa adotar posteriormente o Tribunal a respeito de sua jurisdição e da admissibilidade da causa. Uma resposta negativa da Câmara de Questões Preliminares à solicitação de investigação não impedirá o Promotor de apresentar ulteriormente outra solicitação com base em novos fatos ou provas relacionados com a mesma situação. Se, após o exame preliminar a que se referem os parágrafos 1º e 2º, o Promotor chegar à conclusão de que pela informação apresentada não há base razoável para uma investigação, informará este fato a quem a tiver apresentado. Isto não impedirá que o Promotor examine à luz de fatos ou provas novos, outra informação que receba em relação à mesma situação"(BRASIL, 2016).

transnacional e desídia ou incapacidade do Estado responsável pela investigação e instrução do processo.

Constatada a competência da Corte, a Câmara autorizará a instauração de inquérito pela MERCOPOL para promover a investigação necessária. Após a conclusão do instrumento, ocorrerá a remeça das peças informativas ao Promotor, que irá oferecer a denúncia acompanhada das provas ao Tribunal Penal do Mercosul ou irá propor o seu arquivamento, que será decidido pela colégio dos procuradores do Mercosul.

Tal colegiado será composto por 05 (cinco) procuradores federais que funcionam no 2º grau dos Estados-membros, por eles indicados, para funcionarem como órgão revisor das decisões do promotor do Mercosul. Acatado o pleito de arquivamento, não poderá o *parquet* oferecer nova denúncia com base nas mesmas provas, nada impedindo, entretanto, que prossiga nas investigações se surgirem novas provas.

O promotor do Mercosul, por sua vez, será aquele sorteado dentre os 10 (dez) promotores que irão compor o Tribunal, também indicados pelos países participantes do bloco. Cada nação indica dois procuradores federais, das províncias ou locais, com notável saber jurídico e reputação ilibada, com atuação em direito processual penal e conhecimento em direito internacional.

A câmara preliminar será formada pelo mesmo número de juízes do colégio do Ministério Público, ou seja, 05 (cinco) membros, com competência para autorizar a investigação a ser realizada pelo órgão acusatório e exercer o juízo de admissibilidade da ação penal.

Para tanto verificará no oferecimento da denúncia se há o preenchimento das condições da ação – possibilidade jurídica, interesse de agir, legitimidade e justa causa, bem como a desídia ou incapacidade da justiça local em investigar, processar e julgar o feito. O lastro probatório mínimo deverá indicar a existência de crime transnacional e em que medida o país membro não buscou a persecução penal, sob pena de indeferimento liminar da ação.

Recebida a peça inaugural, havendo o preenchimento de todos os requisitos, a Câmara preliminar poderá ainda ouvir tanto a pessoa física ou jurídica que apresentou a notícia crime para esclarecer o fato quanto o país acusado de não processar a causa e pedir-lhe explicações no prazo de 02 (dois) meses, como consta na Corte Interamericana de Direitos Humanos (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2016).

Aceita a denúncia, haverá a remessa do feito à Câmara de instrução e julgamento, que irá dar seguimento regular ao processo. Será sorteado um juiz como relator, excluído magistrado da nação acusada de não ter dado prosseguimento ao feito por desídia ou incapacidade.

A Câmara será composta por um total de 12 (doze) magistrados, sendo 05 (cinco) juízes dos Estados-membros e 07 dos Estados associados, quais sejam, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana, Suriname (MERCADO COMUM DO SUL, 2016). Havendo empate, prevalecerá a decisão da maioria dos juízes pertencentes aos Estados-membros.

A fim de observar o duplo grau de jurisdição, o Tribunal Penal do Mercosul terá a Câmara de Apelação, composta por 05 (cinco) juízes diversos dos integrantes da Câmara de Instrução e da Câmara Preliminar, também indicados pelos países integrantes do bloco para tal finalidade.

As decisões deverão estar pautadas nos Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, não havendo a previsão de prisões perpétuas, pena de morte, desumanas ou cruéis. A execução da pena se dará no país da nacionalidade do infrator, cabendo à Corte Penal do Mercosul fiscalizar o seu cumprimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto concluímos que:

a) Os tradicionais mecanismos de cooperação jurídica penal internacional em matéria penal mostraram-se insuficientes para a repressão à criminalidade transnacional, em especial devido à excessiva burocracia e a antiquada noção de soberania, ainda pautada no absolutismo, na figura do monarca, havendo uma resistência dentre os Estados, por consequência, em cooperar;

b) Os novos instrumentos de cooperação penal internacional também não se revelaram suficientes para aumentar a comunicação entre as nações e garantir, por oportuno, uma cooperação mais eficaz para a repressão à criminalidade transnacional;

c) Tal assertiva é pautada nos dados apresentados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, ao apresentar

as estatísticas sobre o número de pedidos realizados pelo Estado ou recebidos e quantos foram efetivamente cumpridos, tendo esta pesquisa analisado apenas o intercâmbio com os membros do Mercosul;

d) Da análise dos dados, concluímos que menos de 50% (cinquenta por cento) das comunicações enviadas ou recebidas são efetivamente cumpridas, havendo uma dificuldade maior do estado brasileiro na comunicação com a Venezuela;

e) A definição de qual Estado-parte será o competente para processar e julgar o crime transnacional configura outro obstáculo para uma eficaz cooperação, bem como a determinação de qual legislação deve ser seguida durante a realização do ato ou produção da prova, do país demandante ou demandado, terminam por criar mais embaraços para a cooperação;

f) A partir da constatação com base em dados concretos, fornecidos pelo próprio DRCI, e dos congressos internacionais e reuniões de órgãos integrantes do bloco, a exemplo da cartilha sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas também apresentada nessa pesquisa, podemos afirmar que os atuais instrumentos também não se revelam suficientes para a repressão à criminalidade transnacional;

g) Dessa forma, propomos a criação do Tribunal Penal do Mercosul, com competência para processar e julgar pessoas físicas e jurídicas por crimes graves transnacionais em razão do bem jurídico violado e da supranacionalidade, como por exemplo, crime organizado transnacional, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de órgãos, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, guerrilhas armadas, terrorismo, crimes contra a ordem tributária e aduaneira quando cometidos por empresas binacionais contra a Tarifa Externa Comum do MERCOSUL;

h) A competência será subsidiária, ocorrendo quando há desídia do país em conduzir o processo, constatada diante da demora injustificada no processamento do feito, pela falta de imparcialidade ou independência, bem como estará configurada quando perceber-se o colapso total ou substancial do sistema nacional de justiça do Estado;

i) Apresentamos ainda a estrutura e funcionamento do Tribunal, composto pelo Ministério Público do Mercosul, Colégio do Ministério Público do Mercosul, Câmara Preliminar, Câmara de Instrução e Julgamento e Câmara de Apelação, reforçando ainda a criação da MERCOPOL, que consistia em um pleito das próprias polícias que atuam no Mercosul, como citado no trabalho;

j) A coordenação dos atos de investigação e concentração das informações junto à MERCOPOL e a implantação do Tribunal Penal do Mercosul, objetivam buscar a máxima

eficiência da cooperação jurídica internacional e o efetivo julgamento dos sujeitos acusados da prática dos crimes transnacionais, notadamente o crime organizado, tráfico internacional de drogas, órgãos e pessoas, suborno internacional e lavagem de capitais.

5. REFERÊNCIAS

ARAS, Vladimir Barros. **Procurado no Mercosul.** Disponível em: <https://blogdovladimir.wordpress.com/2011/01/15/procurado-no-mercosul/ > Acesso em 05 de jun. 2016.

BECHARA, Fábio Ramazzini. Cooperação Jurídica internacional em matéria penal**: eficácia da prova produzida no exterior**. São Paulo: Saraiva, 2011.

BRASIL, Câmara dos Deputados. Constituições dos países do Mercosul : 1996-2000 : **textos constitucionais Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai**. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/10092> Acesso em 05 jun. 2016

_____, Congresso Nacional. **Decreto n.154, de 26 de junho de 1991.** Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Disponível em**: <**http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0154.htm>. Acesso em 30 de mai. 2016.

_____, Congresso Nacional. Decreto n.3.468, de 17 de maio de 2000.Promulga o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, assinado em San Luis, República Argentina, em 25 de junho de 1996, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai**. Diário oficial [da] República Federativa do Brasil.** Brasília, 18 maio 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3468.htm>. Acesso em: 12 abr. 2015.

_____, Congresso Nacional**.** Decreto n.5.015, de 12 de março de 2004.Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. **Diário oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 15 mar. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acesso em 30 maio 2016.

_____. Decreto n. 4.388, de 25 de setembro de 2002. Promulga o Estatuto de Roma. **Diário oficial [da] República Federativa do Brasil,** Brasília 26 de setembro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm> Acesso em 05 jun 2016.

_____. Lei n.9.613, de 3 de março de 1998.Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. **Diário oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 4 mar. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm>. Acesso em: 30 mai. 2016.

_____, Ministério da Justiça. **Institucional.** Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2> Acesso em 30 mai 2016

_____. **Estatísticas.** Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/estatisticas> Acesso em 30 mai. 2016

_____. **Orientação por país.** Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/orientacoes-por-pais/uruguai> Acesso em 01 jun .2016

_____. **Relatório estatístico de pedidos.** Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/estatisticas/arquivos/novembro-2014.pdf > Acesso em 01 jun.2016

_____, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Carta Rogatória n. 2.484/RU. Relator: Min. Barros Monteiro. Corte Especial. Brasília, 29 jun. 2007. **Diário da Justiça**, Brasília, 13 ago. 2007. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=706546&num_registro=200700728176&data=20070813&formato=PDF>. Acesso em: 30. mai. 2016.

_____. **Resolução n° 09 de 04 de maio de 2005.** Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/legislacao/doc.jsp?livre=cartas+rogat%F3rias&&b=LEGI&p=true&t=&l=20&i=1 > Acesso em 05 jun 2016

_____, Supremo Tribunal Federal. **O quê, como, quando, onde e o porquê da Corte Interamericana.** Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/corteidhportuguesfinal.docx.> Acesso em: 05 jun 2016

BRUTTI, Roger Spode. Da cooperação policial à polícia comum no Mercosul: **delitos transnacionais como gênese**. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10151#_ftn2> Acesso em 05 jun. 2016.

EUROPOL. **About us.** Disponível em: <https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us> Acesso em 05 jun.2016

FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno**: nascimento e crise do Estado nacional**. São Paulo: Martins Fontes, 2002

GEORGETOWN UNIVERSITY. **República Bolivariana de Venezuela.** Constitución de 1999 con reformas hasta 2009. Disponível em: <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/vigente.html> Acesso em 04 jun. 2016

MERCADO COMUM DO SUL. Conselho do Mercado Comum. Decisão n. 48, de 2010. **Acordo sobre Mandado Mercosul de Captura e Procedimentos de entrega entre os Estados Partes do Mercosul e Estados Associados**. Foz do Iguaçu, 2010. Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/acordo-sobre-mandado-mercosul-de-captura-e-procedimentos-de-entrega-entre-os-estados-partes-do-mercosul-e-estados-associados-dec-48-10/>. Acesso em: 31 mai. 2016.

_____. Mais sobre o Mercosul. Disponivel em: < http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul> Acesso em 05 jun. 2016

MUGGAH, Robert. Na América Latina, enquanto diminui a pobreza, aumenta a violência. **Por quê?** Disponível em: < http://americasquarterly.org/content/na-america-latina-enquanto-diminui-pobreza-aumenta-violencia-por-que > Acesso em 05 jun 2016.

OCAMPO, Raúl Granillo. **Direito Internacional Público da Integração**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 351.

SPRANDEL, Márcia Anita; PENNA Rodrigo P. M. **Cooperação e coordenação policial no MERCOSUL e Chile para o Enfrentamento ao tráfico de pessoas**. Disponível em:

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_233763.pdf> Acesso em 30 mai. 2016

TRIUNFANTE, Luís de Lemos. **A cooperação judiciária Europeia em matéria penal:** o espaço ibérico em particular. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. p. 50-51

VILARES, Fernanda Regina. Cooperação jurídica internacional em matéria penal e a recuperação de ativos. In: FERNANDES, Antonio Scarance; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho (Coord.).**Direito processual penal internacional**. São Paulo: Atlas, 2013, p. 538-539.